LA FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD POLITICA EN COLOMBIA

AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA*

*Profesor de la Universidad Externado de Colombia. Tratadista de Derecho Electoral.

SUMARIO: I. Antecedentes. II. Particularidades del sistema político colombiano. III. Financiación de las elecciones. IV. Financiación de los partidos políticos. A. Financiamiento público. B. Financiamiento privado. V. Financiación de las campañas. A. Financiamiento público. B. Financiamiento privado. VI. Comentario final.

La lucha por el poder que, a través de las elecciones, protagonizan los partidos políticos en las democracias de hoy, es no sólo una competencia entre ideologías, programas, candidatos y maquinarias electorales sino, además, una formidable confrontación de fuerzas económicas.

Mientras la política fue un quehacer de grupos oligárquicos al cual sólo eran admitidos sectores minoritarios de la sociedad, únicamente ocasionaba gastos en tiempo de elecciones, gastos que resultaban moderados, además, por el restringido tamaño de las democracias de antaño.

Merced a la universalización del sufragio, a la mayor participación política de los ciudadanos, al activismo de los sindicatos y partidos de masas y a la revolución de las comunicaciones, hacer política en la sociedad moderna cuesta muchísimo más. De esta manera el monto, la naturaleza, el origen y el destino de los dineros que se invierten en el sostenimiento de las actividades políticas ha pasado a convertirse en un problema de interés público y en objeto de regulación jurídica.

I. ANTECEDENTES

Con todo y ser esenciales para la vida democrática de los pueblos, los partidos políticos han sido tradicionalmente considerados como asociaciones de naturaleza privada, creados por la libre iniciativa de ciudadanos en ejercicio de las libertades de conciencia y de expresión política. Esta concepción se mantuvo inalterable durante todo el siglo XIX y buena parte del XX.

Es por ello que durante largo tiempo el Derecho Público guardó absoluto silencio sobre el tema de los partidos políticos. Por su parte, el Estado mantuvo escrupulosa distancia respecto de los partidos, quizá para no dar motivo a que se dijera que pretendía interferir el libre ejercicio del derecho de asociación política.

Modernamente los partidos políticos han pasado a ser considerados como instrumentos indispensables para la realización de la democracia y la participación política de la sociedad. Por su directa proyección en la vida colectiva y en la organización y orientación del Estado, los partidos se conciben hoy como entidades no estatales de interés público.¹ Este nuevo enfoque ha dado lugar a regulaciones constitucionales y legales en materia de creación, funcionamiento y extinción de partidos políticos, y ha permitido desarrollar modalidades de intervención del Estado con relación a la actividad partidista, con el objeto de garantizar la supremacía de intereses de carácter general (democracia, libertad, soberanía, principio de igualdad) por sobre los intereses particulares (de individuos, de grupos, de regiones, de gremios) que se agrupan normalmente en toda asociación política.

Es así como se ha llegado a la necesidad de regular el financiamiento de las actividades partidistas y de autorizar la intervención estatal en esta materia para asegurar la igualdad de oportunidades entre los actores políticos y el respeto de los demás derechos y obligaciones inherentes a esta nueva legislación.

Como consecuencia de los altos costos que las campañas electorales registraron a partir de la década de los años cincuenta, debido entre otras razones a la intensa utilización de los medios modernos de comunicación social en la propaganda de los candidatos y los partidos, se suscitaban ostensibles situaciones de desigualdad entre los competidores políticos por razones económicas. La mayor dependencia de patrocinadores y subsidios privados

tendía a convertir los partidos políticos en instrumentos de poderosos intereses económicos, no siempre transparentes, y a favorecer la imposición de prácticas oligárquicas con grave amenaza para la vigencia de los principios democráticos. Modernamente muchos países han experimentado dolosamente en sus sistemas partidistas los efectos negativos de la falta de equidad financiera en la confrontación de las organizaciones políticas.

Ante panorama tan preocupante, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, algunos países como la Gran Bretaña dictaron normas para limitar rigurosamente los gastos electorales de los partidos, para así evitar abusos por parte de los poseedores de riqueza.²

En Alemania surgió, en cambio, un novedoso sistema de financiación pública de los partidos y las campañas electorales que, aplicado por primera vez en 1964, dio lugar a un modelo que ha influido y estimulado procesos similares en otros países.

En una u otra forma los ordenamientos jurídicos relativos a la financiación de las actividades partidistas procuran corregir, subsanar o reducir las deficiencias del financiamiento privado (del cual no se puede prescindir en forma total, porque ello implicaría una violación de las libertades y porque ningún demócrata puede desear la estatización de los partidos políticos), y de protegerlos en cuanto sea posible de los riesgos de corrupción y manipulación que este tipo de financiación conlleva.

Ahora bien, los partidos modernos cumplen funciones que van más allá de las simplemente electorales, pues deben fiscalizar y controlar la actividad gubernamental, proyectar constantemente su imagen frente al electorado para mantenerse en el poder o para erigirse como alternativa de poder, promover la estabilidad social y el cambio. Los partidos necesitan, por tanto, medios económicos para existir como organizaciones permanentes, más allá de los periodos electorales, y para desarrollar actividades de investigación y otras modalidades de asistencia a los representantes electos del partido. A la atención de estos requerimientos apuntan los mecanismos de financiación de origen público que, como especie de subsidio a los partidos políticos y, por tanto, de inversión pública en democracia, se ha venido extendiendo por numerosos países, y ahora ha sido instituido por la Constitución de 1991.

II. PARTICULARIDADES DEL SISTEMA POLITICO COLOMBIANO

Desde el punto de vista de su regulación jurídica nuestros partidos han pasado por tres etapas bien diferenciadas: primero funcionaron en un completo vacío constitucional; a partir del acto legislativo No. 8 de 1905 comenzaron a ser aludidos en las normas constitucionales y, finalmente, con la expedición de la ley 58 de 1985 (“Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos políticos y se provee a la financiación parcial de las campañas electorales”) se han reglamentado detalladamente.³ La Constitución Política de 1991 ha elevado a canon constitucional varios de los principios contenidos en la ley 58 de 1985 y los ha reforzado con elementos nuevos que a continuación se analizarán.

Hasta antes de la ley 58 de 1985 las finanzas de los partidos políticos no tuvieron limitación ni reglamento alguno, ni contaron legalmente con el sistema de subsidio a las campañas que esta ley creó, al cual la Constitución de 1991 ha agregado una contribución estatal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.

No obstante la importancia de estas reformas, es necesario evaluar su impacto en nuestro sistema de partidos haciendo unas precisiones ineludibles. Por una parte, forzoso es reconocer que a nuestros partidos políticos tradicionales nunca les ha faltado recursos para cumplir con sus actividades habituales, que han estado circunscritas básicamente a los eventos electorales.

Sin descontar que sus arcas invariablemente han recibido el auxilio de prósperos y discretos mecenas, no cabe duda que la mayor parte de los ingresos de estos partidos siempre ha tenido origen oficial. El auxilio estatal a las finanzas de los partidos obedece modernamente a la idea de incorporar la financiación pública a la privada, que tradicionalmente ha asegurado la subsistencia de los partidos políticos. Paradójicamente, en Colombia la

financiación de los partidos tradicionales, y especialmente la de sus campañas electorales, se ha efectuado habitualmente con recursos provenientes del erario público. Lo grave es que los procedimientos para hacer llegar tales recursos a las organizaciones partidistas han sido con frecuencia tortuosos, clandestinos e ilegales.

No es posible cuantificar esos dineros, ni saber cuál es la relación existente entre las contribuciones de origen privado y los dineros escatimados a los presupuestos, públicos, porque se trata de información no publicada de las organizaciones partidistas, porque nunca se ha hecho en Colombia una investigación sobre el tema, y porque con relación a este manejo financiero, normalmente subrepticio, se ha borrado cuidadosamente toda huella.

Puesto que la financiación oficial de los partidos y las campañas ya existía, de hecho, lo que las normas constitucionales sobre el tema intentan es legalizar el flujo de recursos públicos hacia las organizaciones partidistas y las tesorerías de las campañas, unificar los criterios y procedimientos de distribución de los subsidios para que de ellos participen equitativamente los partidos, dosificar y controlar las contribuciones estatales para evitar despilfarros y malos manejos, y reprimir el peculado político, ampliamente tolerado, en virtud del cual ciertos políticos se ingeniaban mil maneras de drenar el tesoro público para atender a gastos partidistas y particulares. Por eso es tan riguroso el nuevo estatuto de incompatibilidades de los congresistas, y por la misma razón el artículo 355 de la Carta prohibió a las ramas u órganos del poder público decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

Las nuevas disposiciones constitucionales sobre financiación tienen mayor efecto con relación a las organizaciones políticas nuevas, y a las que por su debilidad electoral han estado marginadas de la administración y, por tanto, del reparto burocrático y presupuestal, y del tráfico de influencias remunerado a través de contratos, primas y comisiones.

Otro vicio del manejo financiero de los partidos es que los dineros destinados a fines partidistas y electorales son administrados por algunos políticos en forma muy ligera, confundiendo frecuentemente con los patrimonios personales de los candidatos y los administradores de las campañas. En verdad, no es raro que de un mismo fondo se tomen dineros tanto para sufragar gastos propios de la gestión política como gastos domésticos y personales, ocurriendo así una doble defraudación: primero contra el tesoro público, y luego contra las finanzas de los partidos y las campañas.

Las medidas constitucionales sobre financiación de la actividad política tienen que ver básicamente con tres temas: financiación de las elecciones, de los partidos y de las campañas electorales. Su objetivo evidente es la modernización y la democratización de los partidos políticos. Otro, menos aparente pero no menos importante, es la lucha contra la corrupción política y administrativa que en distintos frentes plantea la Constitución, y que por motivos de bulto mucho tiene que ver con la forma como se financian las actividades partidistas.

III. FINANCIACION DE LAS ELECCIONES

Corresponde a la órbita de la función electoral del Estado todo lo relativo a la organización de las elecciones: identificación de los votantes, elaborar el censo electoral y las listas de sufragantes, determinar y dotar los lugares de votación, recibir la inscripción de candidatos, designar claveros y escrutadores, suministrar los elementos necesarios para las votaciones, vigilar la jornada electoral, coordinar los escrutinios.

El costo de todas estas actividades y servicios es normalmente asumido, en todas partes del mundo, por el Estado. En Colombia es la organización electoral, entidad nacional, especializada, técnica y autónoma, la encargada de desempeñar la función electoral.

El artículo 258 de la Carta, que define el voto a la vez como un derecho y un deber ciudadano, traslada al Estado un aspecto organizativo de las elecciones que venían cumpliendo desde siempre los partidos políticos colombianos: la elaboración y distribución de los votos. En adelante los ciudadanos votarán “con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente”.

Se descarta definitivamente la tradicional “papeleta”, que elaboraba por su propia cuenta cada partido o candidato, y el votante debía guardar dentro de un sobre para introducirla en la urna electoral. Se la reemplaza por las tarjetas electorales, donde aparecen impresas todas las opciones de voto (no sólo la de un partido o la de un candidato), para que el elector señale en ella la opción de su preferencia.

Entre las importantes ventajas de esta innovación cabe destacar las siguientes:

A. El costo de la impresión de los votos es asumido por el Estado, con el consiguiente alivio financiero para los partidos políticos.

B. Se garantiza que en todos los lugares de votación el elector encontrará votos de todos los candidatos inscritos, gracias a la distribución oficial, algo que era imposible de lograr en el sistema anterior de distribución a cargo de las organizaciones partidistas.

C. Los partidos quedan exonerados, además, de los costos de distribución (envío de los votos a todos los lugares de votación, ubicación de pregoneros y colaboradores encargados de ofrecer y entregar las papeletas a todo potencial simpatizante) y del complejo esfuerzo organizativo que tal operación implicaba.

D. Gracias también a la distribución oficial de las tarjetas electorales se garantiza el secreto y la libertad del sufragio, principios que eran fácil y frecuentemente vulnerados bajo el régimen de distribución de las papeletas por cada uno de los partidos y candidatos.

IV. FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Las normas constitucionales sobre financiación de los partidos políticos disponen tanto con relación al financiamiento público como al privado, que en seguida analizamos por separado.

A. Financiamiento público

Cuando la Constitución establece en su artículo 109 que el Estado contribuirá a la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, supera la idea del auxilio esporádico para la coyuntura de las campañas electorales, recogida en la ley 58 de 1985, y extiende este beneficio estatal al fomento de las actividades partidistas permanentes.

Se transparenta aquí el plan constitucional de inducir la transformación de nuestros partidos políticos, del carácter que actualmente tienen como organizaciones eminentemente electorales, hacia un tipo de organización más estable y presente en la vida política nacional. Esta medida estimula indudablemente la actividad partidista, con especial favorecimiento de los partidos y movimientos nuevos y pequeños.

El financiamiento público del funcionamiento de los partidos y movimientos presenta las siguientes características:

1. La financiación consiste en una “contribución”. Quiere ello decir que el Estado no asume todos los gastos de funcionamiento del partido, sino que los sufraga parcialmente, a través de una ayuda, auxilio o subvención cuyos pormenores serán precisados por la ley.

2. En principio sólo tienen derecho a esta subvención los “partidos y movimientos políticos con personería jurídica”.

3. Los partidos y movimientos políticos que carezcan de personería jurídica, y los “grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos”, podrán participar de este beneficio bajo la condición de que obtengan “el porcentaje de votación que señale la ley”.

4. Es de observar que las organizaciones políticas sin personería jurídica dependen de su desempeño electoral para poder recibir la contribución económica estatal, la cual siempre llegará después de unas elecciones y con directa referencia a ellas. En cambio, la personería jurídica otorga a las organizaciones políticas que la poseen (en tanto la conserven, pues podrían perderla) el privilegio de recibir el subsidio oficial sin tener que preocuparse de las contingencias electorales.

5. Los partidos y movimientos políticos (no menciona la norma constitucional a los movimientos sociales ni a los grupos significativos de ciudadanos) y, además, los candidatos están obligados a rendir cuentas ante la autoridad electoral sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos. Estos informes deberán ser del dominio público.

6. La Constitución no prevé la posibilidad de limitar los gastos de los partidos o movimientos políticos en materia de funcionamiento, como sí lo autoriza con relación al monto de los gastos que se pueden realizar en las campañas electorales.

7. El artículo 110 de la Carta prohíbe, a quienes desempeñen funciones públicas,⁴ hacer contribuciones políticas de cualquier naturaleza, o inducir a otros para que las hagan, “salvo las excepciones que establezca la ley”.⁵ Se impiden, así, mecanismos de financiación pública indirecta, usuales especialmente entre los militantes de los partidos europeos de izquierda, tales como el llamado “impuesto del partido”⁶ o los descuentos salariales por nómina a los funcionarios públicos.

8. El artículo 111 consagra el derecho de utilización de los medios de comunicación social del Estado, en todo tiempo (circunstancia que favorece el funcionamiento permanente de las organizaciones políticas), en favor de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El derecho que allí mismo se establece para los “candidatos debidamente inscritos” está restringido, por su naturaleza, a la época de las campañas electorales.

9. La financiación pública para el funcionamiento de los partidos podría consistir no sólo en asignaciones económicas con cargo al presupuesto nacional, sino (debería considerarlas seriamente el legislador) en distintas modalidades conocidas en otras latitudes, tales como: préstamo de locales o espacios públicos, cesión de espacios públicos para exhibición y propaganda, franquicias para el uso de las comunicaciones, exenciones fiscales, etcétera.⁷

10. Las fórmulas concretas de subsidio económico a los partidos y movimientos serán determinadas por la ley. El proyecto de ley No. 11 presentado este año a la Cámara de Representantes por el Gobierno Nacional, propone la creación de un fondo que se constituirá anualmente con un aporte de cien pesos por cada persona inscrita en el censo electoral nacional. Los dineros de este fondo serán distribuidos por el Consejo Nacional Electoral cada año entre los partidos y movimientos así: el 15% de los recursos del fondo por partes iguales; el resto, teniendo en cuenta diversos criterios (a los cuales se atribuyen porcentajes determinados), tales como: número de votos obtenidos en la última elección para Congreso, número de afiliados activos, la existencia de estructuras partidistas regionales y locales, tener periódicos o revistas oficiales del partido, gastos realizados en foros, viajes, medios de comunicación oficial, etcétera.⁸

11. La administración financiera de los recursos de origen estatal por parte de los partidos es de naturaleza privada. Muy inconveniente resultaría someterlos en la ejecución del gasto a todas las formalidades y requisitos del derecho público, pero están, eso sí, sujetos a la inspección y vigilancia de la organización electoral.

B. Financiamiento privado

En ejercicio de sus derechos políticos y, en especial, del derecho-deber de participación democrática (artículos 40 y 95 de la Constitución), todo ciudadano tiene la facultad jurídica de contribuir económicamente a las actividades de los partidos, y los partidos y movimientos, a su vez, tienen el derecho de recibir contribuciones y ponerlas al servicio de la causa política.

Los principios constitucionales son en este aspecto bastante pocos, pudiendo resumirse así:

1. Las contribuciones “individuales” (provengan éstas de personas naturales o jurídicas) a partidos, movimientos o candidatos, podrán ser limitadas por la ley. El proyecto del gobierno fija este tope máximo en la suma de diez millones de pesos.

2. Toda contribución de origen privado deberá ser declarada por los partidos y movimientos cuando rindan pública cuenta de sus ingresos a la autoridad electoral.

3. La rendición pública de cuentas sobre el volumen y origen de los ingresos se refiere precisamente a las contribuciones de origen privado, ya que las provenientes del Estado son de antemano públicamente conocidas. Aquí el control es de especial trascendencia, pues sirve para procurar un equilibrio financiero entre los contenedores políticos y para detectar donaciones dudosas o ilícitas.

4. No prevé la Constitución restricciones en cuanto a la naturaleza de las contribuciones de origen privado, pudiendo por tanto las organizaciones políticas recurrir a una amplia gama de tipos de financiación, sin otro límite que la cuantía máxima que determine la ley: cuotas de afiliados; contribuciones de sindicatos, cooperativas y afines; donativos de empresas, organizaciones partidistas, agencias gubernamentales y gobiernos extranjeros. Estos últimos, generalmente encubiertos por el beneficiario, podrían vulnerar la autonomía del sistema político nacional.⁹ Comentario especial merece la posibilidad de que personas extranjeras residentes en el país hagan donativos a organizaciones partidistas o a candidatos. La ley debe prohibir expresamente estas contribuciones, teniendo en cuenta que ellas son, según lo antes dicho, expresión de un derecho político, y que esta clase de derechos, conforme al artículo 100, se reserva a los nacionales.

5. Salvo para los efectos de control financiero, la Constitución no se ocupa de fuentes de financiamiento privado distintas a las “contribuciones individuales”, tales como: préstamos y créditos (la igualdad podría romperse por el tratamiento privilegiado que un banco decidiera otorgar a un determinado partido o candidato), recursos obtenidos por administración de recursos propios del partido, o de la realización directa de actividades industriales o comerciales.¹⁰

6. Tampoco está previsto regular ciertos métodos partidistas para allegar recursos, consistentes en organizaciones de promotores y patrocinadores; organizaciones de acción paralela, del género de las ONG (organizaciones no gubernamentales), las fundaciones políticas y los centros de estudios o investigaciones políticas, que llevan a cabo esfuerzos de campaña diseñados para ayudar a un partido o respaldar determinadas candidaturas, y para tal propósito manejan autónomamente sus propios recursos, recursos que no ingresan físicamente al tesoro de los partidos o movimientos y, por tanto, escapan a los rígidos controles que se han impuesto a estos últimos y a las cuantías máximas fijadas por la ley a las “contribuciones individuales”.

7. La Constitución guarda silencio respecto del acceso a los medios de comunicación privados, que son sin duda una modalidad muy importante de contribución a la actividad política, cuando dicho acceso se cede gratuitamente.

V. FINANCIACION DE LAS CAMPAÑAS

El régimen constitucional de financiación de las campañas sigue, por sus características generales, muy cerca las antes trazadas con relación a la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos.

A. Financiamiento público

Los subsidios estatales a las campañas consisten también en “contribuciones”. A las organizaciones políticas con personería jurídica se les otorga sin la exigencia del porcentaje mínimo legal de votación que deben acreditar las organizaciones que carezcan de ella.

Corresponde a la ley determinar de qué manera los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán utilizar los medios de comunicación social del Estado durante las campañas. El artículo 111 no otorga este derecho a los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, pero sí a los “candidatos debidamente inscritos”.

La ley puede escoger uno entre muchos sistemas de financiación estatal de las campañas conocidos en el Derecho Comparado. Podría consistir en el financiamiento directo a todos los partidos que participan en un proceso electoral, otorgado con independencia de los votos o las curules obtenidas. Una segunda modalidad consistiría en el reembolso de los gastos electorales sólo a los partidos que hubieran obtenido un determinado porcentaje de los votos emitidos (Alemania, Francia, Costa Rica, Ecuador). La ley podría exigir otras condiciones, como la obtención de una cantidad mínima de votos o de curules.¹¹

El proyecto de ley elaborado por el gobierno únicamente prevé la financiación de las campañas de carácter nacional (para elección de Presidente y de congresistas), callando en lo concerniente a las elecciones departamentales y municipales. El sistema de financiamiento consiste en la asignación de un valor en pesos a cada voto obtenido por el candidato o la lista, quedando condicionada la entrega de la contribución a la obtención de una proporción mínima de votos.

B. Financiamiento privado

La ley puede determinar el monto de las contribuciones individuales a las campañas. Las contribuciones que proceden de fuentes extranjeras son preocupantes, pues de no ser estrictamente reguladas y en otros casos prohibidas, tendrían ciertos extranjeros mayor poder de participación en la política nacional que los ciudadanos comunes, quienes tan sólo cuentan con su derecho de voto individual, no otorgado por la Constitución a aquellos precisamente para impedir su injerencia en la política interna.

Según el artículo 109 de la Carta, “la ley podrá limitar el monto de los gastos” que se pueden realizar en las campañas. El proyecto de ley del gobierno asigna esa función al Consejo Nacional Electoral, lo cual no parece ir en armonía con la disposición constitucional.

VI. COMENTARIO FINAL

Las disposiciones constitucionales sobre las cuales ha recaído el presente análisis apuntan hacia objetivos muy ambiciosos. Persiguen modificar viciosas costumbres políticas profundamente arraigadas, democratizar y modernizar los partidos políticos e inclusive el sistema de partidos mismo, e incubar en la sociedad una nueva ética electoral.

La legislación deberá desarrollar y perfeccionar los controles necesarios para que se la respete, tanto los de carácter estatal como los de origen popular, es decir, todos aquellos que pueden y deben crecer al abrigo de la participación ciudadana.

El cumplimiento de las leyes sobre financiamiento político debe garantizarse, además, con el respaldo de rigurosas sanciones (que hubiéramos deseado encontrar en el proyecto del Gobierno) para quien las transgreda. Es así como deberían penalizarse las más graves violaciones al estatuto sobre financiamiento político, y constituirse además en causales de inhabilidad definitiva de los responsables para aspirar a cargos de elección popular.

Sin embargo, la más severa y perfecta de las legislaciones será ineficaz si no se apoya en la voluntad colectiva de acatarla por convicción.

NOTAS:

¹ Jiménez de Parga, Manuel. Los Regímenes Políticos Contemporáneos. Madrid, editorial Tecnos, tomo 1, 1984, p. 223.

² En la práctica el sistema ha tenido efectos muy limitados debido a las dificultades que plantea su adecuada fiscalización.

³ Cfr. Hernández Becerra, Augusto. Derecho Electoral. La elección popular de alcaldes. Bogotá, publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1988, pp. 146 y ss.

⁴ Según el artículo 123 de la Constitución “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.

⁵ Sobre el particular se ha observado: “debe destacarse la extensión de la prohibición a los miembros de las corporaciones de elección popular, lo cual no parece muy lógico. Este es un aspecto que deberá tener presente el legislador al establecer las excepciones que la misma norma constitucional prevé”. (Lleras, Arenas, Charry y Hernández. Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia, Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1992, p. 234.)

⁶ Aportación forzosa que quienes desempeñan cargos de elección hacen para el sostenimiento del partido al cual deben el cargo.

⁷ Cfr. García Cotarelo, Ramón. Los Partidos Políticos. Madrid, editorial Sistema, 1985.

⁸ La fórmula combina demasiados factores, algunos de los cuales son francamente utópicos o ideales, y no parece ser muy práctica debido a su complejidad. Es, además, imperfecta en algunos detalles que, según el proyecto, deberán ser ultimados mediante reglamentación por parte del Consejo Nacional Electoral.

⁹ Cfr. Muñoz Q. Hugo A. “Financiamiento de los partidos políticos”, en Diccionario Electoral, autores varios, San José, editorial CAPEL, 1989, p. 333.

¹⁰ El partido comunista francés, por ejemplo, posee no menos de 310 empresas, de las cuales 130 corresponden al sector comercial y financiero, 28 son compañías de bienes raíces, 114 compañías de publicidad, editoriales y librerías y 38 cooperativas y compañías de ayuda mutua (Campana, André. L'argent secret: le financement des partis politiques. París, editorial Arthaud, 1976, pp. 152 a 160).

¹¹ Cfr. Vio Grossi, Eduardo; Rey, Juan Carlos, y otros. El financiamiento de los partidos políticos y la democracia en Venezuela. Caracas, Instituto de Estudios Políticos, editorial Ateneo de Caracas y Editorial Jurídica Venezolana, 1981.